



El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, junto al presidente de Correos, José Manuel Serrano Quintana.



María José Lacosta, gerente comercial de negocio de Ibercaja, junto al exministro Carlos Solchaga.



Diego Martínez López, secretario de Financiación Autonómica.



Luis Atienza, presidente de Agracapital Partners.

Montero descarta que la subida del salario mínimo destruya empleo

L. SALCES / P. M. SIMÓN
 MADRID

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió ayer la subida del 22% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros al mes pactada con Unidos Podemos para 2019, como un elemento para lograr acabar con la precarización y defendió que no existe "evidencia" contrastada sobre que este incremento provoque una

destrucción de puestos de trabajo, tal y como han venido alertando el Fondo Monetario Internacional, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España recientemente.

Afirmó así que, en opinión del Gobierno, esta subida implicará un aumento del consumo en España. "Es de justicia social y será también un elemento importante para el estímulo económico".

Montero no quiso concretar cómo será la subida

de las bases máximas de cotización en el IRPF, que según desveló el presidente de Airef, José Luis Escrivá, sería del 12% para el año que viene. La titular de Hacienda apuntó que no es una medida que haya sido aún adoptada y que se están analizando diferentes proyectos dentro del marco del diálogo social con los agentes sociales. Con ello quiso justificar que no estuviera incluida en el borrador presupuesta-

rio enviado a la Comisión Europea.

Sobre financiación autonómica, Montero aseguró que el primer paso está en determinar la insuficiencia financiera que tienen las comunidades autónomas. "Tenemos que volver a ajustar cuál es el coste del Estado de bienestar", apuntó para insistir después en la necesidad de "cambiar el modelo desde la insuficiencia de recursos hasta el reparto entre distintos territorios

de manera que no se produzca lo que hay en este momento, cuando hay hasta 800 euros de diferencia per cápita entre la comunidad mejor financiada y la peor. No hay variable que eso lo justifique", precisó.

Por el momento, apuntó que están iniciando el debate con las autonomías en el plano político, "algo que el PP no había hecho" remarcó, y dijo que "espero que a lo largo de esta legislatura tengamos por lo

menos los mimbres de esta reforma. Hay elementos en común que son lo que estamos impulsando, por ejemplo, determinar qué parte el Estado tendría que ceder a las comunidades".

El presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP) anunció ayer, por su parte, que hay un acuerdo con Hacienda para la creación de un grupo de trabajo la próxima semana para estudiar la reforma de la regla de gasto.



Blanca Montero, de Sabadell, junto a Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco y la titular de Hacienda.



Pablo Echenique, número dos de Podemos.



Francisco de la Torre, responsable fiscal de Cs.



Juan Emilio Maíllo, dircom de Telefónica, y Alfonso López-Tello, dircom de PwC.



Valentín Pich, director del Consejo General de Economistas.



Baltasar Garzón, presidente de Fibgar.



Miguel Crespo, de Bankia.



Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES).